



Intersindical Valenciana

C/Juan de Mena, 18 Tel.963 91 91 47 Fax:963
92 43 34 CP 46008 València
correu-e:
intersindicalvalenciana@intersindical.org
<http://www.intersindical.org>

Paro (huelga general) nacional en Colombia.

La masacre policial ordenada por el gobierno de Iván Duque y ejecutada por su Ministerio de Defensa no logra desmovilizar al pueblo colombiano

Con profundo dolor e indignación condenamos e informamos al País Valencià y a todos los pueblos del Estado español, la gran masacre que ha cometido esta semana el gobierno de Colombia en cabeza de su presidente Iván Duque y su ministro de Defensa Diego Molano, contra el valeroso pueblo colombiano que se ha lanzado en vigorosas movilizaciones a las calles desde el 28 de mayo en un paro nacional indefinido que hasta el día de hoy se sostiene a pesar de las escalofriantes cifras publicadas por la Campaña Defender la Libertad Asunto de Todas:

“21 personas asesinadas, 208 heridas, 18 con mutilación por lesiones oculares, 10 casos de violencia sexual y violencias basadas en género, al menos 503 detenidos y 42 agresiones intencionales a defensores/as de Derechos Humanos o reporteros reporteros independientes que denunciaban o trataban de poner fin a estos atropellos”. Estas son las cifras registradas rigurosamente hasta el 2 de mayo al atardecer, pero se desconocen los reportes exactos de las víctimas de esa noche, por lo que podrían aumentar considerablemente los registros.

Las reivindicaciones del paro nacional son múltiples y recogen lo planteado en las masivas movilizaciones de finales del anterior paro del año 2019 antes de la explosión de la pandemia, agudizada la crisis social por el deplorable manejo que el gobierno ha dado a la misma, pues de hecho, se sitúa en el puesto 12 con mayor número de personas infectadas en el mundo (2.900.000) y en el puesto 11 por número de personas fallecidas (73.230) por el Covid 19 contabilizados al día 30 de abril.

Pero lo que colmó el vaso de la paciencia ciudadana y precisó la urgencia inaplazable del paro, fue la reforma tributaria, cínicamente titulada por su ponente, el ministro Alberto Carrasquilla como “Ley de solidaridad social”, presentada de forma irracional en el momento más crítico de la desprotección social en que se han visto sumidas las grandes mayorías del país. Dicha reforma pretendía recoger aproximadamente 25 billones de pesos para cubrir los grandes vacíos fiscales dejados por la demencial política aplicada para asumir “supuestamente” los costos de la pandemia en cuanto a protección social, cosa que no ha sido así y lo resumimos de la siguiente manera: lo primero que decretó fue aprobar un desembolso de 18 billones (equivalente a 3.913 millones de euros) para el sector financiero privado con el pretexto de que era necesario que tuviera liquidez para subvencionar a las empresas. De estos 18 billones, los banqueros descontaron inmediatamente 8 billones (1.743 millones de euros) de ganancias que les adeudaban y se lo repartieron sin vergüenza alguna, la mayor parte para el zar de las finanzas en

Colombia, el jefe de la banda de corrupción más grande de los últimos decenios en Colombia, Luis Carlos Sarmiento Angulo, involucrado hasta los tuétanos en billonarios contratos con Odebrecht para citar solo al gigante de la corrupción de las corporaciones suramericanas. Y los otros 10 billones (2.178 millones de euros) fueron entregados a las empresas más poderosas de Colombia, dejando en el desamparo a las Pymes (pequeñas y medianas empresas) que aportan el 80% del empleo "formal" en Colombia, porque entre otras cosas, el empleo informal o el llamado "rebusque" en términos populares alcanza más del 50% de la población económicamente activa, en términos reales. Y a las grandes masas hambrientas se les repartieron mercados miserables que además, de manera casi que surreal fueron otro fortín para las mafias regionales que inflaban los precios de los alimentos para robar a costa de los míseros mercados que llegaban a los hogares incluso hasta con algunos productos perecederos en estado de descomposición. En fin, para sintetizar, en medio de este criminal panorama de corrupción, de total burla y cinismo frente a la desesperación social, el gobierno ultra neoliberal de Colombia, ha tenido la indecencia de presentar dicha reforma tributaria, la tercera en menos de tres años que lleva en el ejercicio del poder, sin tener en cuenta en lo más mínimo las condiciones que llevaron a mayor miseria a inmensos sectores ya de hecho, empobrecidos desde hace años. Por lo demás, el desempleo se ha acabado de disparar, ya que un altísimo porcentaje de Pymes han tenido que cerrar sus empresas. A día de hoy, más de nueve millones de personas en el país suramericano, solo alcanzan a comer una vez al día.

Pero el paro como lo hemos dicho, no se agota en el rechazo masivo, multitudinario que de manera explícita se expresó contra la reforma tributaria, sino que exige además detener la imparable masacre de líderes sociales (35 masacres en lo que va del año 2021 con 132 víctimas) es decir, el desmonte del paramilitarismo y por supuesto, el cumplimiento integral de los acuerdos de paz. Hasta el momento han sido asesinados más de 250 ex combatientes de las Farc-EP y más de 900 líderes y líderes sociales indígenas, afrodescendientes, campesinos y urbanos, desde la firma del Acuerdo de Paz en el año 2016.

Por eso, cuando el día domingo 2 de mayo, el presidente Duque apareció ante las cámaras a escenificar la "supuesta" retirada de la reforma, nadie celebró ni le creyó porque ya todo el pueblo colombiano conoce su mitomanía, pero además, porque no dijo terminantemente que se hundía la reforma, sino que le pedía al Congreso retirarla y que presentaría un nuevo texto. El colmo del cinismo. Pero lo más grave, es que de inmediato ordenó arrasar con todo el movimiento social concentrado en las calles, principalmente en la ciudad de Cali, donde todas las vías de salidas inter-departamentales continúan bloqueadas con el apoyo del sector de los camioneros (transportistas) que se ha sumado decididamente al paro nacional. Al respecto, se filtraron declaraciones del comandante del Ejército, el general Zapateiro donde daba informe al presidente Duque del plan criminal para "restablecer el orden" lo que significaba orden de fuego al "vandalismo terrorista" que ellos llaman cuando está comprobado que muchos de los llamados vándalos son pagados por las mismas mafias asociadas al gobierno y a su partido Centro Democrático, para desprestigiar la protesta social. También se han descubierto policías y paramilitares infiltrados, incluso circula un video de un policía vestido de civil que recibió un balazo y cuando lo van a auxiliar le descubren el chaleco antibalas que portaba. Por último, está demostrado hasta la saciedad que el ESMAD (Escuadrón Móvil Anti Disturbios) es el que llega a agredir y a violentar a los pacíficos manifestantes, lanzando indiscriminadamente gases lacrimógenos, bombas aturdidoras y balas para dispersar las masas, provocando las increíbles cifras citadas al inicio, de muertos, heridos graves, desapariciones, violaciones a mujeres, detenciones, etcétera, que a pesar de todo no logran vencer el coraje del pueblo, en su mayoría jóvenes de las barriadas populares que al no tener nada

que perder, sin perspectivas de futuro, con hambre, sin estudio ni trabajo, no les importa entregar la vida por su país.

“El Comité Nacional de Paro manifiesta su decisión de seguir en el paro y la movilización nacional, levantando como objetivos centrales para este momento:

- Garantías y libertades democráticas: garantías constitucionales a la movilización y a la protesta
- La desmilitarización de las ciudades
- Cese de las masacres y castigo a los responsables.
- Desmante del ESMAD
- Negociación con el Comité Nacional de Paro del pliego de emergencia, así resumido:
 1. Retiro del proyecto de ley 010 de Salud y fortalecimiento de una masiva vacunación.
 2. Renta básica de, por lo menos, un salario mínimo legal mensual
 3. Defensa de la producción nacional agropecuaria, industrial, artesanal, campesina. Subsidio a las PYMES y empleo con derechos y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria.
 4. Matrícula cero y no a la alternancia educativa.
 5. No discriminación de género ni por identidad sexual y étnica.
 6. No privatizaciones. Derogatoria del decreto 1174.
 7. Detener las erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas de cultivos con glifosato.”

El pueblo colombiano está dando una lección de dignidad, de consciencia social, de resistencia ante un Estado fallido, entregado a las mafias del narcotráfico y el paramilitarismo que está llegando a la apoteosis de su desfachatez, de su cinismo y de su indudable fracaso político, social y cultural en que está sumiendo a una sociedad que en su inmensa mayoría se caracteriza por ser un pueblo trabajador, emprendedor, alegre y hospitalario. En este momento crucial de la historia de Colombia nos preguntamos al igual que en tiempos recientes lo hicimos con la barbarie impuesta contra sus pueblos por Piñera en Chile, por Moreno en Ecuador y el gobierno golpista de Añez en Bolivia, dónde están la señora Bachelet y el señor Almagro quienes en su momento fueron cómplices instigadores de dichas masacres y crímenes de Estado, así como ahora continúan atizando el fuego contra la República Bolivariana de Venezuela y ocultan la injerencia desmedida de Iván Duque quien con deslumbrante cinismo vocifera y brama acusando de lo que “él” comete con su pueblo a otro gobierno que dicho sea de paso, por más bloqueo de USA y de sus aliados de la OTAN, por más dificultades que le haya tocado enfrentar ha sido ejemplar en el cuidado de sus compatriotas frente a la pandemia del Covid19, siendo uno de los países con menor número de infectados y de fallecidos en el mundo. Pero los intentos de golpes de Estado al presidente Nicolás Maduro, que han propiciado desde territorio colombiano los paramilitares protegidos por el gobierno de Duque siempre son ocultados a la llamada comunidad internacional. No se habla tampoco de las tropas especiales de USA que con total impunidad y sin ninguna vergüenza el señor Duque invitó a permanecer en suelo colombiano en contra de la Constitución y de gran parte del Congreso que se pronunció contra semejante acto que atenta directamente contra la soberanía del país y prefigura la asistencia y coordinación en el terreno de las agresiones bélicas a la república hermana.

Por todo lo anterior, condenamos de manera enérgica los crímenes del Estado colombiano y como responsable directo de la masacre señalamos al presidente Iván Duque que en esta fatídica semana ha dejado al descubierto su verdadero carácter

fascista, violador de los DDHH consolidando la doctrina uribista que durante todo el siglo XXI ha sembrado de terror el bello y riquísimo -aunque expoliado- territorio de Colombia, cuyos pobladores continúan con gran firmeza y determinación en pie de lucha. Por tanto, exigimos el cese inmediato de la violencia por parte de la Policía y el Ejército Nacional de Colombia contra los manifestantes, respetando el derecho inalienable a la protesta social y demandamos de la sociedad valenciana y de todo el Estado español la solidaridad con el pueblo colombiano. Así mismo, exigimos al gobierno de la Generalitat y al gobierno estatal de coalición, su pronunciamiento ante la ONU y ante el Parlamento Europeo para que intervenga a tiempo antes que el desangre sea imparable porque como hemos visto esta vez, nuevamente las colombianas y colombianos están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias y ofrendar la vida por la liberación de su nación de las garras de la narco-paramilitar dictadura que oficia en cabeza de Iván Duque.

Nuestro abrazo solidario al combativo pueblo colombiano

Intersindical Valenciana

Valencia, 4 de mayo de 2021

P.S. El día de ayer renunció el economista Alberto Carrasquilla a su cargo como ministro de Hacienda.